

Haciendo la vista gorda

Corrupción y violencia relacionada con las drogas en Rosario

Ross Eventon*

El tráfico de drogas no es un fenómeno nuevo en la ciudad argentina de Rosario. Desde la década de 1990, y en gran medida escapando del foco de la mirada pública, la distribución de drogas ilícitas en los barrios pobres y periféricos de la ciudad ha dependido de bandas dirigidas por familias y pequeños traficantes. La pobreza y la marginación social han favorecido el comercio. Los jóvenes integrantes de las bandas, conocidos como ‘soldados’, se han disputado territorios. La demanda local de drogas ilegales ha servido de motor. Las ganancias ilícitas se han blanqueado en colaboración con abogados y asesores financieros locales, y la corrupción entre la policía y los funcionarios locales ha garantizado que los principales traficantes, cuya identidad es bien conocida, puedan seguir operando con la única inquietud que les plantean las amenazas de sus rivales. Este último elemento parece explicar por qué, hasta que el tema saltó al dominio público, el tráfico de drogas no era tema de preocupación política en la ciudad.

El giro se produjo el día de año nuevo de 2012. Ese día, tres activistas sociales fueron asesinados a tiros en el barrio de Villa Moreno por miembros de una banda que los confundió con rivales. Los asesinatos no tenían nada de excepcional, pero las víctimas sí: a diferencia de las víctimas habituales, los activistas tenían un movimiento que los respaldaba. Sus muertes dieron lugar a manifestaciones locales y a peticiones para que se actuara. La prensa y los funcionarios rosarinos se vieron de repente obligados a prestar atención al tráfico de drogas y a la violencia relacionada con este. Desde entonces, una serie de investigaciones oficiales ha contribuido a que se entienda mejor la naturaleza del comercio de drogas en la ciudad y ha aportado más pruebas de



Recomendaciones

- Mantener el foco en el liderazgo de las bandas más poderosas y violentas, por ejemplo siguiendo el rastro del dinero, y revertir la tendencia que considera como una respuesta política suficiente el incremento del número de efectivos de fuerzas de seguridad en las zonas violentas.
- Modificar el enfoque de dos niveles del poder judicial, de forma que se reconozca que los miembros menores de edad de las bandas son una población vulnerable y que hacer frente a la cultura de violencia exigirá iniciativas especiales.
- Erradicar la corrupción en las fuerzas de seguridad locales y provinciales, reconocer la forma en que el enfoque estatal favorece esta complicidad, y generar estadísticas más fidedignas para informar mejor a las personas responsables de formular políticas.

la complicidad de las fuerzas de seguridad y la negligencia del Estado que, como se sabía hacía tiempo, facilitaban el tráfico.

Las bandas de Rosario

Se considera que cuatro o cinco grandes grupos controlan la distribución de drogas ilícitas en Rosario. Cada uno de esos grupos domina una parte de la ciudad

* Investigador radicado en América Latina.

donde se venden las drogas, ya sea por parte del mismo grupo, de las numerosas bandas más pequeñas que mantienen unas cuadras de territorio, o de traficantes que pagan a cambio de protección. En los barrios empobrecidos que forman un anillo alrededor de la ciudad, conocidos como ‘villas’, las drogas se venden en un ‘búnker’ o ‘kiosco’, por lo general una caseta con una sola habitación donde opera una persona joven, normalmente menor de 17 años, para evitar así que puedan ser castigados como adultos, y en algunos casos son niños de apenas 10 años. Estos soldados (o ‘soldaditos’, como se suele llamar a los menores) pasan el día encerrados tras una pequeña ranura, por donde entra el dinero y se despachan las drogas. Las drogas más vendidas son cocaína, marihuana y fármacos, conocidos como ‘pastillas’ que se mezclan con alcohol para producir un efecto. En las calles de los alrededores, hacen guardia soldados armados para impedir la llegada de ladrones y rivales que intenten invadir el territorio. Según un testigo citado en una investigación oficial de 2012, a un soldado se le pagan 400 pesos (57 euros) al día por estar dentro de un búnker; 200 pesos si es menor. Un soldado en la calle cobra 150 pesos (21 euros), el doble si va armado. Y según esa misma fuente, el pago por garantizar la protección de la comisaría asciende a 1.500 pesos (215 euros) por día.¹

Investigaciones de ámbito nacional realizadas tras los asesinatos en Villa Moreno sugieren que en la ciudad de Rosario (con aproximadamente un millón de habitantes) operan hasta 400 búnkers, lo cual significaría que el número de jóvenes trabajando dentro de ellos y en su protección asciende a miles. Según una fuente citada en un estudio, un búnker genera, como promedio, unos 12.000 pesos (1.400 euros) al día. Muchos periodistas locales y un importante estudio universitario han multiplicado esas cifras y afirman que, haciendo un cálculo estimado, el valor anual del comercio se sitúa entre los 1.800 y 2.000 millones de pesos (entre 255 y 286 millones de euros) para toda la ciudad. Esta cifra se publica a menudo, pero el burdo método de deducción no infunde mucha confianza sobre su precisión. Además, es probable que las ganancias de los búnkers solo represente una parte del mercado, teniendo en cuenta que no todas las drogas ilícitas –y puede que ni siquiera la

mayor parte de ellas– se venden a través de este canal. Observando el supuesto tamaño del comercio local, expertos de la zona apuntan que la principal fuente de demanda se encuentra en las clases medias y altas del centro de la ciudad.²

Según un estudio universitario desarrollado durante cinco años en tres barrios con altos niveles de violencia, las bandas operan de forma bastante fluctuante, sin mucha estabilidad, organización jerárquica ni reglas internas. Una de las autoras del informe señaló que la violencia es “altamente regulada” y centrada en los rivales y que, en ocasiones, los miembros de la banda se ven obligados a castigar a otros miembros que han matado a personas inocentes que no estaban implicadas en las disputas entre bandas ni en el comercio de drogas. Según sus observaciones, los niños y adolescentes construyen su identidad mediante la pertenencia a la banda, los asesinatos generan prestigio personal y reconocimiento, y la mayoría de los soldados entrevistados solo estaban involucrados en la banda temporalmente y, con el tiempo, la acababan abandonando.³

El grupo más poderoso, conocido como Los Monos, que se sospecha que está dirigido por la familia Cantero y que parece distinguirse de las bandas habituales, ha crecido en los últimos años. Durante la década de 1990, estuvo implicado en diversas actividades delictivas, como el contrabando de marihuana del vecino Paraguay. A principios de la década de 2000, ya se estaba enfrentando a otras bandas en el sur de la ciudad y, tras derrotar a sus rivales, se acabó convirtiendo en una organización delictiva bien consolidada. Los Monos tienen ahora un campo de actividad más amplio que solo el tráfico de drogas: extorsionan a los comerciantes locales, gestionan sus propios búnkers, dirigen ‘cocinas’ donde se transforma en polvo la pasta base de coca y, según algunas fuentes, son lo bastante poderosos como para imponer un cobro a quienes desean vender drogas en la ciudad. Como forma de recabar apoyo, también reinvierten parte de las ganancias en las comunidades locales.⁴

Las bandas están interrelacionadas con las ‘barras bravas’, los grupos de hinchas de

los equipos de fútbol que, en Argentina, a veces parecen más bien un negocio delictivo organizado en torno a este deporte. Las barras tienen su papel en el comercio de las drogas, vendiendo sustancias dentro del estadio durante los partidos y dando a las bandas acceso a un gran grupo de hombres jóvenes, que compran drogas y trabajan como soldados. El líder de la barra controla la venta de drogas y se beneficia de ella, además de otras actividades que usa el grupo para generar dinero –como cobrar por aparcar el automóvil en zonas cercanas al estadio o incluso tomar una parte del salario de los jugadores–, y son habituales las disputas por ocupar este cargo. En Rosario, las relaciones entre las bandas involucradas en el tráfico y las barras de los dos grandes equipos de fútbol de la ciudad, el Rosario Central y el Newell's Old Boys, son tanto de colaboración como de confrontación. Algunas bandas están asociadas con ciertos equipos, aunque es evidente que los beneficios son más importantes que la lealtad al club. Los Monos, según se informa, ofrecen servicios de protección a ambas barras. Al mismo tiempo, los jefes de los Los Monos, la familia Cantero, están vinculados con el Newell's y han estado implicados en disputas por el liderazgo de la barra. Esta interconexión significa que las rivalidades entre bandas y las luchas por hacerse con el control de la barra pueden confundirse o vincularse.

En los últimos años, el número de homicidios en Rosario se ha incrementado, principalmente, al parecer, por la violencia entre bandas.⁵ Según la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, en 2004 se produjeron 89 homicidios; en 2005, 108; en 2006, 90; en 2007, 113; en 2008, 121; en 2009, 130 y, en 2010, 124. A fines de 2010, se registró un acusado aumento de los asesinatos de jóvenes y, a lo largo de 2011, hubo 169 asesinatos. A fines del año siguiente, 2012, la cifra había alcanzado los 182, lo cual supone una tasa de homicidios del 15,1 por ciento por cada 100.000 habitantes; a modo de comparación, el promedio en la capital del país, Buenos Aires, fue del 7,6 por ciento ese mismo año. El año 2013 se cerró con un balance aún más sangriento; a fines de noviembre, el número de asesinatos ya había alcanzado los 220. La mayoría de las víctimas de homicidios registrados en 2012 eran hombres de entre

16 y 39 años, y más del 70 por ciento fue asesinado con algún tipo de arma de fuego.⁶

Las razones de este repentino aumento de la violencia no están claras. La explicación más plausible es que los asesinatos fueron fruto de una mayor competencia entre bandas. Las pruebas sugieren que la explicación se halla probablemente en los intentos de Los Monos por controlar más territorio y en el consiguiente choque con otra banda operativa en la ciudad vecina de Villa Gobernador Gálvez.⁷ Por otro lado, en 2010 fue asesinado un destacado líder de la barra del Newell's, un hombre vinculado con Los Monos, acto que podría representar el primer disparo de este nuevo conflicto, desencadenando una serie de ataques de represalia.

Si bien es difícil afirmar con certeza cuál fue el detonante concreto de la violencia, lo que sí es indudable es que, en los últimos años, estas bandas se han encontrado operando en un nuevo contexto lucrativo y que el botín para los grupos más poderosos es sustancial.

Violencia en el nuevo contexto

El entorno de las organizaciones de tráfico de drogas en Argentina ha cambiado de forma significativa en los últimos 20 años. En la década de 1980, el país servía principalmente como ruta de tránsito para drogas que manejaban carteles extranjeros con destino a Europa, pero para la década de 1990 este fenómeno iba ya acompañado de un considerable aumento en la demanda local de drogas, coincidiendo con unas políticas económicas que provocaron una pobreza y desigualdad generalizadas, y que acabaron llevando al país a la recesión. Según estadísticas oficiales, desde fines de la década de 1990 la demanda de cocaína ha disminuido y se ha estabilizado, y actualmente se sitúa por debajo del promedio en Sudamérica.⁸ Sin embargo, las operaciones de represión contra el tráfico en Colombia y México han forzado a los carteles a emplear nuevas rutas y el papel de Argentina como corredor para el tránsito de drogas ilícitas se ha acentuado.⁹ Argentina, que tiene frontera al norte con Bolivia y Paraguay, países productores de cocaína y marihuana respectivamente, es ahora un territorio donde se producen y exportan precursores químicos

y la pasta base de coca se transforma en polvo. Es también una importante fuente de efedrina, que se importa desde Europa y después se traslada a los carteles en México.¹⁰ Y Rosario, en concreto, una ciudad portuaria en la ruta de la cocaína –principalmente de Bolivia, pero también de Perú y Colombia– con destino a Europa, se encuentra en un punto importante de la cadena del tráfico.

Los carteles extranjeros más grandes subcontratan el paso de las drogas por el país a clientes locales, que luego reciben una parte de las ganancias o que obtienen un porcentaje del cargamento para vender ellos mismos.¹¹ La relación entre los grupos delictivos locales que operan en Rosario y los carteles no está clara, aunque, según autoridades citadas por la prensa, hay miembros de carteles colombianos activos en la ciudad.¹²

El papel cambiante de Argentina ha dado lugar, sin duda, a un entorno más lucrativo, pero es importante reconocer que, aunque puede que algunas de las bandas más poderosas de Rosario hayan reforzado sus finanzas ayudando a trasladar drogas por el país, los violentos enfrentamientos que han incrementado la tasa de homicidios son el resultado de luchas entre los soldados por el derecho a abastecer el mercado local en la ciudad. Y en el epicentro de esta violencia se hallan las condiciones socioeconómicas que han llevado a muchos niños y jóvenes de las villas a decidirse por una vida de soldado.

Terreno fértil

Las villas ofrecen un terreno fértil a los traficantes de drogas y bandas delictivas que buscan externalizar la gestión cotidiana del comercio, así como sus riesgos, entre los jóvenes locales. Las reformas económicas de la década de 1990 que acabaron llevando al país a la depresión y destruyeron la industria local alrededor de Rosario, región que entonces fue parte de uno de los cinturones industriales más importantes de América Latina, generó las condiciones propicias para que pudieran arraigar el tráfico y la mentalidad de banda. Las reformas se tradujeron en una pobreza y desempleo generalizados y, durante toda la década, trabajadores comunitarios y expertos en drogas trataron en vano de llamar la atención

sobre las condiciones sociales extremas, el número de niños que estaba abandonando la escuela secundaria, el tráfico, el consumo de drogas y la aparición de tendencias violentas y delictivas entre una generación joven en riesgo.¹³

Además de las reformas económicas, el enfoque del Gobierno argentino con respecto a las drogas estaba dominado por las políticas represivas consolidadas en la década de 1970 durante los seis años de dictadura y continuó más tarde con el enfoque de ‘guerra contra las drogas’ respaldado por los Estados Unidos. Se daba preferencia al control social y delictivo por delante de la salud y el bienestar públicos.¹⁴ Las personas usuarias y los actores menores eran objetivo prioritario y las iniciativas en apariencia centradas en las drogas servían principalmente para reforzar las fuerzas de seguridad; en 2007, el entonces ministro del Interior y actual senador Aníbal Fernández reconoció públicamente el papel que desempeñaron estas políticas: “Por perseguir consumidores las bandas crecieron a sus anchas y se volvieron lo que son”.¹⁵ Para fines de la década de 1990, los expertos locales ya estaban observando altos niveles de uso de drogas y la presencia de bandas y traficantes mayores, y expresando su inquietud por la falta de respuesta política.

Desde principios de la década de 2000, la economía argentina ha registrado un fuerte repunte, impulsado por medidas proteccionistas que han estimulado la economía interna. Esto se ha producido con poca ayuda extranjera directa y escaso acceso a préstamos del exterior. La pobreza, el desempleo y la desigualdad en la renta se han reducido de forma sustancial y el gasto social como porcentaje del producto interior bruto (PIB) se ha triplicado.¹⁶ Sin embargo, esta notable recuperación no ha revertido en todo el mundo por igual y en muchas zonas del país sigue habiendo áreas empobrecidas. La tasa oficial de desempleo en la provincia de Santa Fe es del 8,6 por ciento, pero cabe destacar que en esta estadística no se contabiliza a una gran parte de la población con un arreglo laboral precario y no permanente, y que a menudo se ve en la necesidad de complementar su salario oficial con otra fuente de ingresos. La carga del desempleo en Rosario también recae de forma desproporcionada en los

jóvenes: según un informe del gobierno provincial de mayo de 2013, un 34,8 por ciento de la población desocupada tiene entre 20 y 29 años.¹⁷ Por otro lado, las tasas de abandono escolar en las villas crecieron en la década de 1990 y siguen siendo elevadas. Las estadísticas oficiales revelan que en los hogares con el quintil de ingresos más bajos del Gran Rosario, 8 de cada 10 personas no ha finalizado la escuela secundaria. Una encuesta realizada en junio de 2010 por el gobierno provincial y que analizaba el carácter social de los hogares durante el período comprendido entre 2003 y 2009 también desveló que en el Gran Rosario el 20 por ciento de los niños menores de 10 años vivía en los hogares situados en el quintil de ingresos más bajos. Los autores observaron que “esto implica una situación de vulnerabilidad en un grupo considerable de los niños más pequeños, reduciendo las oportunidades de inserción en la sociedad con una vida digna”.¹⁸ Y como las familias se han visto obligadas a abandonar las zonas rurales cercanas a raíz de la adopción por parte del Gobierno de un modelo de desarrollo agrario que prioriza la soja y los monocultivos por encima de la agricultura tradicional, la población de las villas ha aumentado considerablemente en los últimos años. Se considera que en torno al 10 por ciento de la población de Rosario vive actualmente en lo que se conoce como ‘asentamientos irregulares’.¹⁹

A pesar de la recuperación económica, el efecto acumulado de abandono sostenido y exclusión social en determinados sectores ha tenido un impacto duradero y en las villas de Rosario vive una generación de jóvenes que, como en muchas otras ciudades de América Latina, responde a la exclusión y al contexto de falta de trabajo rechazando la sociedad. Las tasas de abandono escolar son un indicio de ello, el uso de drogas es otro, y aún otro es la cultura de la violencia que ha surgido de la mano de la pobreza y el tráfico. Muchos de los homicidios o ataques denunciados entre muchos adolescentes y niños en las villas ponen de manifiesto una predisposición a resolver los conflictos con la violencia. Estas tendencias ya se observaron durante la década de 1990 y parece que, últimamente, se han exacerbado. Es importante reconocer este aspecto, ya que una respuesta política concertada exigiría algo más que simplemente

proporcionar oportunidades de empleo.

Un revelador estudio publicado por un colectivo no gubernamental ilustra las características sociales de esta generación de jóvenes que están dispuestos a luchar y morir por el dinero que se mueve en el comercio de drogas. El colectivo entrevistó a 48 chicos de entre 16 y 18 años recluidos en un centro de detención juvenil (el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario) durante los primeros seis meses de 2012 por delitos que iban desde el robo al homicidio. La investigación generó los datos siguientes:

El 94% de los chicos provenía de barrios periféricos de la ciudad; el 83% no había terminado la escuela primaria y ninguno la secundaria; el 23% vivía con ambos padres, otro 23% no vivía con ninguno de los padres y el 44% vivía solamente con la madre; el 21% tenía alguno de los dos padres muertos; el 19% tenía alguno de los padres presos; el promedio de hermanos era de 5,8 (incluyendo los medios hermanos, que tenía el 65%); el 23% tenía un hermano muerto por violencia o sobredosis; el 31% tenía algún hermano preso; el 40% tenía hijos, pero solo la mitad convivía con ellos.

El estudio del colectivo también desveló que el uso de drogas solía comenzar a los 12 o 13 años, que todos los entrevistados consumían sustancias psicoactivas y que el 65% usaba cuatro sustancias o más (las más populares eran el tabaco, la marihuana, la cocaína y los psicofármacos).²⁰

Corrupción, complicidad e impunidad

Las investigaciones que siguieron al asesinato de los tres activistas sociales en 2012 han aportado más pruebas de lo que se sabía desde hace tiempo: la participación de la policía en el comercio de drogas está muy extendida. Altos cargos del Gobierno nacional del Frente para la Victoria han reconocido abiertamente la conexión entre drogas y policía en Rosario, que, al igual que la provincia de Santa Fe, está gobernada por el rival Partido Socialista. Agustín Rossi, un antiguo diputado nacional por la provincia de Santa Fe que ascendió al cargo de ministro de Defensa en 2013 ha manifestado: “Lo que sucede en esta ciudad tiene que ver con la connivencia de las fuerzas de

seguridad y el delito narco. El problema en la provincia de Santa Fe es que el nivel de complicidad que existe entre sectores de la policía y las organizaciones de traficantes es altísimo, y eso permitió que el delito crezca hasta los niveles que creció en Santa Fe y en Rosario.”²¹

La policía recibe sobornos a cambio de no tocar los búnkers; pasa información a los traficantes, los ha ayudado para que sean apresados y se considera que suministra armas a los soldados. Pocos búnkers podrían funcionar sin la complicidad de las fuerzas de seguridad locales, ya que sus ubicaciones son bien conocidas y apenas se ocultan, y los vecinos aseguran que suelen crearse colas a sus puertas. En enero de 2013, el exintegrante de una banda declaraba al diario nacional Página 12: “El [traficante de drogas] que termina dominando es el que tiene un mejor arreglo con Drogas Peligrosas [la división policial encargada de los temas relacionados con drogas ilícitas]. Es que sin arreglo, no hay nada. Ellos (los de Drogas) te dicen dónde podés poner un quiosco, pero a veces necesitan voltear a alguno y te piden que le des un perejil para voltear”.²² La policía actúa de vez en cuando contra los búnkers, pero el impacto es mínimo y es difícil eludir la conclusión, que subrayan expertos locales, de que dicha actuación responde más a objetivos de publicidad de cara a la opinión pública que a parte de una iniciativa concertada contra el comercio.²³ La policía también ha adquirido la reputación de tener ‘el gatillo fácil’ y se han registrado casos de personas que han muerto en las villas a manos de la policía en circunstancias poco claras.²⁴

La división de Drogas Peligrosas, ahora rebautizada con el nombre de Dirección General de Control y Prevención de Adicciones, es especialmente conocida y tiene antecedentes de colaboración con el tráfico de drogas. Las depuraciones ocasionales entre los miembros de la fuerza policial parecen haber tenido un escaso impacto en su comportamiento. Existen también sospechas de luchas internas entre Drogas Peligrosas y otro departamento, Comando Radioeléctrico, por conseguir competencias en las zonas de la ciudad que son más ‘rentables’, es decir, donde los integrantes de la fuerza policial pueden conseguir más dinero con los sobornos de los traficantes locales de drogas. Sin embargo, la corrupción entre las fuerzas de seguridad

no es un fenómeno exclusivo de la ciudad de Rosario. La policía fue la encargada de hacer cumplir las leyes de la brutal dictadura argentina, que duró de 1976 a 1983, y desde entonces ha mantenido a parte del personal y las tácticas de esa época. Uno de los vestigios de la dictadura es la ‘caja negra’, donde los ingresos de ganancias ilícitas – tradicionalmente de la prostitución y el juego clandestino, pero cada vez más del tráfico de drogas– se reúnen y después se reparten entre los miembros de la fuerza policial como una especie de gratificación. También se ha denunciado que estos mismos fondos ilícitos se destinan a las campañas políticas locales de los partidos que reciben el apoyo de la policía.²⁵

Las investigaciones de 2012 y otros hechos ocurridos desde entonces han desvelado nuevos ejemplos de la conexión entre el tráfico de drogas y la policía y, por un breve período, han atraído la atención pública, normalmente centrada en la violencia entre soldados, a este tema. El caso más notable ha girado en torno a las acusaciones de que Hugo Tognoli, en su día máximo responsable de la división de Drogas Peligrosas de Santa Fe y más tarde, cuando las investigaciones lo obligaron a dimitir, el jefe de policía de la provincia, habían estado apoyando y protegiendo a traficantes de drogas. Las pesquisas aportaron pruebas que parecían concluyentes. Sin embargo, en junio de 2012 la Cámara Federal de Apelaciones desestimó el caso contra Tognoli por haber formado parte de una red delictiva. Tognoli sigue preso por acusaciones menores de prestar asistencia a traficantes de drogas.²⁶ Tognoli no es el primer funcionario de alto rango de las fuerzas de seguridad en la región en estar vinculado con el tráfico de drogas, su número 2 y sucesor, Cristian Sola, fue también destituido del cargo y está siendo investigado por ‘enriquecimiento ilícito’. Las acusaciones contra Tognoli y las insinuaciones de corrupción en los más altos niveles hasta la fecha han implicado a otros seis miembros de Drogas Peligrosas, pero no se han traducido en ningún cambio institucional importante.

En enero de 2013, un incidente parecido al triple asesinato de los activistas sociales arrojó más luz sobre el papel de la policía y la complacencia de las autoridades locales. Tres integrantes del Movimiento Evita, una

organización social vinculada con el Frente para la Victoria, el partido gobernante, fueron tiroteados y heridos por soldados en el barrio de Nuevo Alberdi. Según un escrito presentado por la Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) ante un tribunal de Rosario, justo antes del ataque contra los tres integrantes del Movimiento Evita, se había producido un tiroteo en el mismo lugar entre bandas rivales. Los vecinos habían llamado a la policía y, según varios testimonios, los uniformados que llegaron más tarde no hicieron más que conversar amigablemente con los jóvenes de las bandas, que aún exhibían sus armas. Según ese mismo escrito, por orden de un comisario no se detuvo a nadie. Cuando el grupo rival volvió a la zona en búsqueda de represalias y disparó a los activistas, uno de los atacantes llevaba puesto un chaleco antibalas con la palabra 'Policía' en la espalda. El escrito en que se da cuenta de este incidente también recogía que la policía local conoce las identidades de los principales traficantes de drogas que operan en esa villa concreta.²⁷ Tras el ataque, integrantes del Movimiento Evita denunciaron al gobierno provincial, acusándolo de ser cómplice en el tráfico de drogas. Después de que mencionaran el nombre de uno de los agresores, un líder del Movimiento, y padre de dos de los heridos, empezó a recibir amenazas de muerte. El funcionario provincial encargado de la protección de los testigos había afirmado en un primer momento que los tres activistas estaban implicados en el tráfico de drogas y se descubrió que otro funcionario había filtrado información sobre los activistas a los traficantes locales. Los familiares de los activistas no recibieron ninguna protección, de forma que el padre y el resto de los 15 integrantes de la familia se han visto obligados a abandonar Rosario. Por motivos como este, parece que la mayoría de los residentes en las villas tiene miedo de hablar contra los traficantes o la policía. Si bien hay pocas pruebas de que las bandas o los traficantes tengan en su punto de mira a periodistas y trabajadores comunitarios para que sean asesinados, destacados periodistas que cubren el tráfico de drogas han recibido amenazas, y se han dado casos en que soldados han amenazado a jóvenes activistas comunitarios y les han ordenado

que se mantengan alejados de su barrio, o en que vecinos enfurecidos que se han unido para destruir búnkers han recibido amenazas de muerte por ello. Hay incluso un caso tristemente famoso en que un popular líder comunitario quedó atrapado en medio de un enfrentamiento con armas de fuego y murió tiroteado por integrantes de bandas.²⁸ Han tenido lugar también varios casos de búnkers destruidos por los vecinos, aunque estos suelen reconstruirse unos días más tarde o se desplazan a algún punto cercano. En otro preocupante incidente en que los vecinos se tomaron la justicia por la mano, un hombre de 25 años murió por las heridas que sufrió después de que prendieran fuego al búnker mientras él estaba encerrado dentro. Es evidente que los vecinos están exasperados con la situación y la violencia, por lo que la autodefensa se dibuja como una inquietante tendencia en aumento. En una villa conocida como La Banana, un grupo de activistas ayudó a los vecinos a convertir un antiguo búnker en un centro cultural, una iniciativa que ha sido bien recibida por los residentes pero que, a pesar de las reiteradas peticiones, no ha recibido ningún apoyo oficial.

El alcance de la corrupción policial, así como su persistencia en el tiempo, apunta a la complicidad política. Las acciones penales contra los integrantes del cuerpo suelen tener carácter reactivo y, por lo general, solo se emprenden cuando el tema salta a la palestra pública. Y en los casos en que sí se inician investigaciones, estas han tendido históricamente a detenerse poco antes de alcanzar a miembros del Gobierno. Por otro lado, la naturaleza del enfoque penal, en que se persigue a los actores menores que participan en el comercio y prácticamente no se actúa contra los actores y beneficiarios más grandes, sugiere la complicidad entre el Gobierno y el poder judicial, especialmente cuando se considera que los principales traficantes son bien conocidos.

En febrero de 2013, un periodista de Rosario, Carlos del Frade, basándose en información filtrada de un trabajo de investigación del Gobierno nacional presentado en agosto de 2012 con el fin de ofrecer un exhaustivo diagnóstico sobre la situación en Rosario, reseñó que uno de los análisis oficiales subrayaba "los vínculos entre las familias que manejan la

venta de droga en los barrios periféricos de Rosario y varias de las empresas que participan del blanqueo de ese dinero a través de presuntas maniobras de lavado”.²⁹ Las enormes sumas de dinero implicadas en el comercio de drogas significan que los traficantes disponen de contables, asesores financieros y abogados que se aseguran de que puedan lavar los ingresos procedentes de sus actividades ilícitas. Las ganancias del tráfico de drogas parecen haberse mezclado muy bien con la economía legal y se considera que las principales inversiones para el lavado de dinero se hallan en los sectores de la inmobiliaria, la construcción, los clubes nocturnos y los concesionarios de automóviles. Sin embargo, los facilitadores y beneficiarios administrativos del tráfico de drogas en Rosario no suelen ser objeto de atención mediática ni de investigaciones serias. Las autoridades judiciales y policiales ponen el acento, sobre todo, en los soldados, el eslabón más vulnerable y fácilmente reemplazable en la cadena del tráfico de drogas. Las iniciativas para seguir el rastro del dinero ilícito en Rosario han sido escasas. Enrique Font, un criminólogo que trabaja en Rosario, describe así las políticas en este ámbito: “Construyen a los consumidores como víctimas patológicas, criminalizan y castigan a los ‘soldaditos’ y trabajadores de la droga, pero jamás identifican ni encierran a los empresarios”.³⁰

Algunos grupos de la sociedad civil han intentado poner sobre la mesa estas cuestiones. En junio de 2013, se celebró una reunión de dirigentes de todo el espectro político que se habían unido para pedir que se prestara mayor atención a la investigación de las grandes inversiones en Rosario y al destino de los beneficios obtenidos con el tráfico de drogas. Ese mismo mes, se organizó en la ciudad una gran protesta callejera de diferentes colectivos –entre los cuales periodistas, académicos, funcionarios del Gobierno nacional y provincial, movimientos sociales y grupos religiosos–, en que se exigió el fin de la impunidad para los traficantes de drogas. Un estudio de la Universidad de Rosario sobre la situación en la ciudad, publicado en junio de 2013 y muy difundido en la prensa local y nacional, se centra principalmente en la corrupción policial, el excesivo foco judicial en los actores de poca monta implicados en el comercio y la falta de iniciativas para ‘seguir el rastro del di-

nero’ e investigar cómo y quién lava e invierte en la economía legal los beneficios obtenidos ilícitamente.

Respuesta

Según el estudio de la Universidad de Rosario: “Desde que los medios nacionales hicieron pública la gravedad de la situación rosarina en relación al narcotráfico, muchos funcionarios y candidatos políticos se refirieron al tema”. La repentina atención despertada por el tráfico de drogas y los homicidios relacionados en Rosario ha expuesto a la luz pública toda una serie de temas incómodos y cuando las autoridades han tratado de abordar públicamente problemas que hacía tiempo que se estaban incubando, pero que habían sido ignorados en gran medida, las respuestas han tendido hacia las maniobras políticas entre el Gobierno nacional y sus rivales, los socialistas, que han gobernado en Santa Fe desde 2007.

Por poner un ejemplo, Agustín Rossi, ministro de Defensa, ha intentado argüir que, antes de que los socialistas asumieran el poder en la provincia, la situación actual habría sido imposible.³¹ Este argumento es, en el mejor de los casos, engañoso; las condiciones básicas ya existían antes de que el Partido Socialista subiera al poder en Santa Fe y el aumento de la violencia es fruto de decisiones tomadas por las bandas, más que de cambios políticos.³² Por otro lado, la violencia podría deberse al descenso, y no al incremento, de la corrupción, y podría darse el caso de que una administración menos corrupta se haya traducido en bandas de drogas más beligerantes. Rossi y otros actores, con consideraciones políticas en mente, también han sostenido que en Rosario se está produciendo un fenómeno excepcional. Esto solo es cierto en un sentido muy limitado: el nivel de violencia. El resto de las características –las bandas locales de drogas, los lugares donde se sabe que se venden drogas, la corrupción policial, los barrios periféricos empobrecidos y la complicidad oficial– están presentes en otras ciudades de todo el país. La situación en grandes ciudades como Córdoba y Buenos Aires, por ejemplo, es en esencia idéntica aunque los niveles de violencia sean menores. En ambos casos, las drogas se venden en viviendas o pequeños ‘kioscos’ en áreas empobrecidas si-

tuadas en las afueras de la ciudad, el comercio está controlado por bandas locales y, de una forma más pronunciada que en Rosario, se han registrado amenazas contra los medios, y ataques selectivos contra trabajadores sociales que se enfrentan a los traficantes de drogas. Y al igual que en Rosario, el tráfico también alcanza a los niveles más altos de las fuerzas de seguridad y entraña complicidad política. En octubre de 2013, por ejemplo, el ministro de Seguridad y el jefe de policía de la provincia de Córdoba presentaron su renuncia a raíz de una serie de acusaciones de que estaban vinculados con el tráfico de drogas.³³ Sin embargo, como el nivel de violencia –y por lo tanto, también la visibilidad del comercio– en estas ciudades es menor, la atención de los medios y las investigaciones oficiales sobre tráfico de drogas no son tan habituales como en Rosario.

Funcionarios del gobierno provincial han intentado, en declaraciones a la prensa, restar importancia al alcance de la violencia en Rosario, sosteniendo que, de los 182 homicidios registrados en 2012, solo el 25 por ciento estaban relacionados con el tráfico de drogas. El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe minimizó la violencia relacionada con las drogas al señalar que Rosario tiene “problemas de violencia y criminalidad compleja similares a los de cualquier ciudad argentina y latinoamericana”.³⁴ Esto es sin duda engañoso, pero difícil de comprobar debido a la tendencia de la policía a etiquetar prácticamente todos los homicidios de las villas como ‘ajuste de cuentas’, un término comodín que incluye riñas entre vecinos y disputas entre familias. De hecho, en un primer momento la policía catalogó de este modo los asesinatos en Villa Moreno y, hasta que esta versión fue cuestionada por otros militantes, los diarios, como suele ocurrir, utilizaron el informe policial como referencia y publicaron lo mismo.³⁵ Una de las consecuencias de este enfoque es que se niega a reconocer estos asesinatos como enfrentamientos entre bandas rivales y, por lo tanto, enmascara la verdadera cifra de muertes relacionadas con las bandas. Puede que este planteamiento también responda a cierto objetivo de autoprotección por parte de la policía local: admitir que estos asesinatos están vinculados con las bandas llamaría la atención sobre el tráfico de drogas y, por lo tanto, podría desencadenar pesquisas sobre su propio papel en el comercio. Por otro lado,

algunos expertos han criticado el sistema de justicia federal por no elaborar más información y análisis sobre las actividades delictivas.³⁶

En general, el debate público en torno al tráfico de drogas y la violencia relacionada con éste en Rosario se ha centrado en la interdicción –la permeabilidad de las fronteras del país y la falta de control en los puertos privados– y la ‘seguridad’ –es decir, el nivel de violencia–, y ha subestimado las causas fundamentales del fenómeno: la falta de perspectivas laborales, la pobreza, la marginación social, la corrupción y la demanda. (Cabe destacar, no obstante, que los funcionarios provinciales reconocen en su discurso que son conscientes de las causas de fondo, especialmente la pobreza.)³⁷ Rosario es una ciudad portuaria por donde pasa un gran número de contenedores de carga de grano y soja; casi el 80 por ciento de la producción nacional de soja se envía desde los puertos de la ciudad. Muchos de estos puertos son privados y están poco controlados, lo cual genera unas condiciones propicias para el tráfico. La falta de regulación en los puertos se menciona a menudo como una preocupación importante, al igual que la poca eficacia del programa de radares en el norte, conocido como ‘operación Escudo Norte’, que se supone que debe evitar los vuelos clandestinos de tráfico de drogas que entran al país por pistas privadas. Miembros del gobierno provincial han culpado públicamente a sus homólogos nacionales por no mejorar las medidas de interdicción en las fronteras del país y han pedido que se envíen más fuerzas de seguridad a la región. La oficina del alcalde de Rosario ha solicitado que Gendarmería, una división especial del ejército que trabaja en el control y vigilancia de fronteras y autopistas, envíe efectivos para ‘patrullar’ los barrios pobres.³⁸ En noviembre de 2013 arrancó un programa provincial para el despliegue de policía comunitaria en el barrio de Las Flores, considerado como la base de poder de Los Monos, con el objetivo de mejorar la relación con las fuerzas de seguridad.³⁹ Un funcionario del Gobierno nacional propuso en septiembre de 2013 rebajar la edad de imputabilidad de los 18 a los 14 años, con lo que se podría encarcelar a más soldados.⁴⁰ En contraposición a estas propuestas, Matilde Bruera, abogada que trabaja como defensora oficial, comentó, a propósito de los 120 menores de entre 16 y 18

años procesados por trabajar en búnkers y a la espera de ser juzgados en tribunales federales, que el sistema penal se caracteriza por la selectividad y que los soldados deberían ser tratados como víctimas y no como delincuentes, abogando por que el tema se plantee en el marco de la ley de trata de personas, dado que, técnicamente, se podría hablar de ‘explotación laboral’.⁴¹

Aunque las propuestas son muy variadas y el discurso público se ha centrado en un mayor uso de las fuerzas de seguridad para afrontar la cuestión, cabe señalar que, en un segundo plano, el Gobierno nacional se ha distanciado –al menos públicamente– del enfoque de guerra contra las drogas y que en Argentina ha cobrado fuerza un impulso hacia la adopción de políticas de drogas más progresistas, basadas en consideraciones de salud pública y en el apoyo social en lugar de la criminalización y el castigo. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha elogiado la labor del actual Gobierno nacional por adoptar “amplias medidas para hacer extensivos los programas de prevención y los servicios de tratamiento y rehabilitación a todos los sectores de la población, incluso a nivel provincial”.⁴² Por otro lado, se reconoce también la importancia de la complicidad entre miembros del Gobierno y las fuerzas de seguridad. En febrero de 2013, la Procuración General de la Nación anunció que, a raíz de la situación en Rosario, se crearía una Procuraduría adjunta especializada en tráfico de drogas. Según el borrador de la resolución que recomendaba crear esta instancia, el objetivo será centrarse en la trama que sostiene la ‘narcocriminalidad’, que prospera gracias a “la corrupción de las estructuras de control del Estado, entre ellas las dedicadas a prevenirla y reprimirla, lo cual resulta facilitado por la gran rentabilidad del negocio”.⁴³

En cualquier caso, es difícil discernir una estrategia política con respecto a la situación en Rosario y, hasta que no se conviertan en norma, las propuestas significan poco. Hace tiempo que está claro que urge abordar el enfoque judicial y la corrupción policial, y se ha dicho mucho al respecto, pero incluso después de los asesinatos de 2012 y toda la atención que suscitaron, poco se ha hecho. Una vez más, solamente cuando el Gobierno pareció verse obligado a actuar se emprendieron acciones serias.

Nuevas operaciones

A fines de mayo de 2013, Claudio Cantero, el supuesto líder de Los Monos, fue asesinado de varios disparos a las puertas de un club nocturno. Durante los dos días que siguieron, se produjeron otros tres asesinatos, considerados como represalias y que generaron una amplia cobertura de la prensa nacional. Apenas unos días después, la policía allanó varias propiedades de la familia Cantero en el marco de unas operaciones que, según se afirmó, estaban relacionadas con la investigación de un asesinato cometido en septiembre de 2012 y en que los principales sospechosos eran los Cantero. Teniendo en cuenta los antecedentes de implicación policial, el momento en que se desplegaron las operaciones –justo cuando una serie de asesinatos llamó la atención de la prensa nacional sobre la situación– pareció afortunado. Además, las redadas que siguieron, en docenas de propiedades, dejaron claro que las fuerzas de seguridad conocían estos lugares desde hacía tiempo. La investigación sigue aún en curso.⁴⁴ A fines de 2013, se había detenido a seis miembros de la policía por supuesta colaboración con Los Monos, y los líderes de las dos barras y un empleado del gobierno provincial permanecían bajo arresto por el mismo cargo. El hermano de Claudio Cantero había sido detenido y su padre y otro medio hermano estaban prófugos. Las operaciones incluyeron redadas en varias mansiones, entre las cuales una enorme casa de campo propiedad de los Cantero en las afueras de la ciudad, donde se encontraron alrededor de 20 vehículos, algunos de ellos de lujo. En la redada de otra propiedad se descubrió una ‘cocina’ y se incautaron 60 kilos de cocaína y precursores químicos. En otra operación afín, se arrestó en Buenos Aires a una persona considerada responsable de haber blanqueado dinero para los Cantero.

A medida que ha ido avanzando el caso, el juez encargado de la causa ha recibido amenazas contra su vida, al igual que el secretario provincial de Seguridad Comunitaria, el ministro de Seguridad de Santa Fe y todos aquellos implicados en las redadas de las propiedades de Los Monos.⁴⁵ En octubre de 2013, el gobernador de la provincia, el hombre que se ha atribuido el mérito de estas actuaciones contra ciertos traficantes conocidos, se encontraba en casa cuando esta fue tiroteada. En seguida se sospechó de miembros de ban-

das y se detuvo a tres personas vinculadas con las barras bravas de los dos clubes de fútbol de la ciudad, aunque algunos comentaristas han aconsejado no descartar la posibilidad de que se tratara de policías descontentos.

El principal sospechoso del asesinato de Claudio Cantero es un hombre considerado como un traficante de drogas rival de la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez. La policía ha practicado redadas en varias propiedades que se cree que le pertenecen, aunque el hombre sigue prófugo. En otra redada desplegada en septiembre, esta vez por parte del Gobierno nacional, se desmanteló una de las mayores 'cocinas' de cocaína jamás encontradas en Argentina. Fueron apresadas tres personas y se decomisaron unos 300 kilos de cocaína y base de coca –una cantidad que, teniendo en cuenta que estaba almacenada en un mismo lugar, apunta a la connivencia policial u oficial– en Funes, una ciudad situada a 23 kilómetros de Rosario, en el marco de una investigación iniciada en marzo de 2012. Aunque todas estas fueron actuaciones importantes por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, es difícil descartar los factores políticos, y esto se ve corroborado especialmente por la forma en que la policía federal manejó la redada de la 'cocina': justo cuando el gobierno provincial se estaba atribuyendo el mérito por las acciones contra los Cantero, el Gobierno nacional dejó muy claro que su propio operativo se había llevado adelante solo porque el gobierno provincial había mostrado una falta de voluntad para tomar medidas con respecto a un traficante que decían que era bien conocido.⁴⁶ Cabe también subrayar que todas estas operaciones tuvieron lugar justo antes de las elecciones legislativas, en octubre de 2013.

El impacto a largo plazo de estas operaciones es incierto. Es evidente que el índice de asesinatos ha aumentado desde la muerte de Claudio Cantero, pero es imposible determinar si las bandas se hundirán, se reformarán con un nuevo líder o se dividirán en grupos más pequeños. Según el fiscal Miguel Moreno, el padre y el medio hermano de Claudio Cantero parecen seguir manejando el negocio desde la clandestinidad. Hablando con la prensa, vecinos de Las Flores aseguran que miembros de Los Bassi, una banda que opera en la vecina Villa Gobernador Gálvez y que se considera que está liderada por el principal

sospechoso del asesinato de Claudio Cantero, habían llegado a la zona y empezado a amenazar a la gente.

Sin embargo, la atención puesta en ciertos grandes traficantes y sus facilitadores es un paso positivo, aunque todavía haya varios personajes de alto perfil que no han sufrido ninguna consecuencia. Los puntos más relevantes que se deben enfrentar en Rosario a largo plazo para transformar la situación son la demanda de drogas ilícitas, la participación de las fuerzas policiales y la complicidad del Estado, un enfoque penal de dos niveles y la existencia de unas condiciones socioeconómicas que significan que a muchos jóvenes no se les están ofreciendo oportunidades para llevar una vida más satisfactoria que la ofrecida por los traficantes de drogas. Cualquier intento por abordar el uso y el comercio de drogas ilícitas debe empezar por reconocer estos factores, y también admitir que estos se repiten en toda Argentina, aunque con niveles más bajos de violencia.

Conclusiones

En Rosario, la presencia de organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas era una prioridad menor para el gobierno hasta el día de año nuevo de 2012, cuando el asesinato de tres civiles inocentes a manos de una banda generó una gran atención mediática. La creciente tasa de homicidios, impulsada por este conflicto territorial entre bandas rivales, ha atraído más atención sobre el tema. La pobreza en las villas, donde se produce la mayoría de los asesinatos, es consecuencia del abandono del Estado y de las devastadoras reformas económicas de la década de 1990. La industria nacional fue destruida en el transcurso de una década y, con ella, desapareció la principal fuente de empleo en la región. Las advertencias sobre el deterioro de la situación fueron ignoradas por los sucesivos gobiernos. Durante unas dos décadas, las bandas han controlado el territorio en estas zonas, donde se venden drogas a través de 'bunkers', pequeñas casetas donde trabajan niños y adolescentes. Estos jóvenes –fundamentalmente hombres y menores de 30 años– luchan y mueren por el control del territorio. En el otro extremo de la cadena del comercio, que no suele ser objeto de investigaciones ni de atención mediática,

se encuentran ciudadanos de clase media que facilitan el lavado del dinero obtenido de forma ilegal y que cosechan sus beneficios sin correr prácticamente ningún riesgo. Es importante destacar también que el tráfico de drogas se ha visto durante largo tiempo facilitado por la corrupción entre las fuerzas de seguridad y la complicidad de miembros del Gobierno y el poder judicial, que sigue manteniendo un enfoque de dos niveles y se concentra en los elementos más vulnerables y visibles. Las últimas operaciones policiales contra los líderes de la principal banda de la ciudad apuntan a una nueva determinación de hacer frente a los miembros de alto nivel. Sin embargo, si no se abordan las cuestiones subyacentes, la situación no mejorará de manera significativa. Reducir los niveles de violencia no debería considerarse como un objetivo aislado en una situación en la que la demanda de drogas ilícitas es una realidad y en la que el comercio se ve favorecido por la pobreza, por un sistema jurídico de dos niveles y por la corrupción.

Notes

1. Del Frade, C. (19 de febrero de 2013) El Rosario de los narcos. El Guardián. Consultado en diciembre de 2013: <http://elguardian.com.ar/nota/revista/1115/el-rosario--de-los-drugs>
2. Calles Perdidas (junio de 2013) Universidad Nacional de Rosario. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.documedia.com.ar/callesperdidas/>
3. Ortega, S. (1 de diciembre de 2013) Bandas, broncas y muertos: análisis de la violencia en Rosario. Infojus Noticias. Consultado en diciembre de 2013: <http://infojusnoticias.gov.ar/provinciales/bandas-broncas-y-muertos-analisis-de-la-violencia-en-rosario-923.html>
4. Una década de poder sin lugar a discusiones (27 de mayo de 2013) La Capital. Consultado en diciembre de 2013: http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2013/5/edicion_1659/contenidos/noticia_5261.html
5. La repentina atención de los medios también ha dado lugar a una tendencia al sensacionalismo entre ciertos periodistas y analistas. Términos como 'guerra de drogas' o 'guerra narco', por ejemplo, utilizados por la prensa nacional, sugieren una comparación con México, lo cual es engañoso. En 2013, la Universidad de Rosario publicó un informe sobre el tráfico de drogas en la ciudad en el que, basándose en las estadísticas de la policía provincial, se recogía el número de homicidios que había tenido lugar en el municipio cada año durante los últimos nueve años. La cifra total es ligeramente superior a los 1.000, un dato que el diario nacional La Nación transformó en 1.000 homicidios *relacionados con las drogas*. Esta afirmación se repitió después en el portal de análisis InsightCrime, con el titular 'Narcoviencia cobra la vida de 1.000 personas en el norte de Argentina: Estudio'. Otro artículo publicado en la prensa británica, con el título 'Nadie está a salvo de la guerra de drogas argentina', sostenía que, de los primeros 20 asesinatos en 2013, la mayoría era de personas inocentes atrapadas en el fuego cruzado. El autor también mantenía que la violencia en Rosario se estaba "extendiendo rápidamente a otras ciudades importantes de Argentina, incluida Buenos Aires". La fuente del primer dato no está clara; el segundo es erróneo y afirmar que la violencia se está "extendiendo" supone malinterpretar la naturaleza de la situación en Rosario. El artículo también señalaba que la ola de violencia que se vivió a principios de 2013 era prueba de que se había acabado la época en que "el país estaba fundamentalmente a salvo de los violentos carteles que controlan el comercio del narco en América Latina". De nuevo, esta afirmación interpreta erróneamente la fuente de la violencia y la naturaleza del comercio en la ciudad, que está controlado por bandas dirigidas por familias y no por carteles.
6. Gallo, D. (15 de julio de 2013) El negocio narco en Rosario ya dejó 1000 muertos y mueve \$ 2000 millones al año. La Nación. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.lanacion.com.ar/1601132-el-negocio-drug-en-rosario-ya-dejo-1000-muertos-y-mueve-2000-millones-al-ano> ; Wells, M. (16 de julio de 2013) Narcoviencia cobra la vida de 1.000 personas en el norte de Argentina: Estudio. InsightCrime. Consultado en diciembre de 2013: <http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/narcoviencia-cobra-la-vida-de-1000-personas-en-el-norte-de-argentina-estudio>; Stocker, E. (26 de febrero de 2013) No One is Safe From Argentina's Drug War. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.independent.co.uk/news/world/americas/no-one-is-safe-from-argentinias-drug-war-8512039.html>
7. Según la documentación de una pesquisa realizada en 2012 por el Gobierno nacional y filtrada por dos funcionarios al periodista y escritor rosarino Carlos del Frade, a principios de 2009, Máximo 'El Guille' Cantero, uno de los líderes de Los Monos, estableció contacto con traficantes de armas paraguayos que más tarde le suministraron armas compradas en Brasil. En torno a esa misma época, el padre de Máximo, Ariel, viajó a las *favelas* de Rio de Janeiro para reunirse con una banda de la zona, conocida como Comando Vermelho, y volvió a Rosario para asociarse con un traficante de drogas local y poner en práctica los métodos aprendidos en Brasil. La veracidad de estas afirmaciones no está clara, pero en caso de verificarse, respaldarían la tesis de que el incremento de la violencia en 2010 se debió a los intentos de la familia Cantero por dominar la distribución de drogas en Rosario. Del Frade, C. (19 de febrero de 2013) El Rosario de los narcos. El Guardián.
8. Según estadísticas del Gobierno, la prevalencia anual en el uso de cocaína empezó a disminuir a fines de la década de 1990, cayendo del 3,7 por

ciento en 1999 al 2,4 por ciento en 2004, se mantuvo relativamente alta hasta que empezó a bajar, a partir de 2006, y después volvió a estabilizarse. Los últimos datos del organismo gubernamental especializado en el tráfico de drogas y las adicciones a sustancias, la SEDRONAR (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico), sitúan la prevalencia anual en el uso de cocaína entre la población con edades comprendidas entre los 16 y los 65 años en un 0,9 por ciento, por debajo del promedio de la ONUDD para Sudamérica, fijado en un 1,3 por ciento. El uso de cannabis también se ha ido reduciendo desde 2006 y, según cifras oficiales, actualmente se encuentra por debajo del promedio en Sudamérica. En 2006, la ONUDD también especulaba con la posibilidad de que el enorme descenso del consumo de cocaína registrado entre 1999 y 2004 pudiera obedecer a cambios metodológicos introducidos por el nuevo Gobierno, aunque añadía que “sería hartamente improbable que, en realidad, el consumo de cocaína hubiese aumentado” y que “todas estas tendencias alentadoras están ligadas probablemente a la intensificación de las actividades de prevención en los países afectados, así como a la estabilización general de la producción de cocaína en los países andinos en los últimos años”. Se ha producido cierta controversia en torno a la prevalencia en el uso de cocaína entre la población. En 2011, el Informe Mundial sobre las Drogas de la ONUDD apuntaba que el índice era del 2,6 por ciento para 2009, lo cual significaba que Argentina tenía el segundo nivel más alto de uso de cocaína del hemisferio occidental. Ese mismo porcentaje fue utilizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y fue muy difundido por la prensa. El jefe de la SEDRONAR cuestionó esta cifra en cuanto fue publicada, arguyendo que la ONU estaba reutilizando estadísticas de 2005 y que el índice real era del 0,9 por ciento. El Informe Mundial sobre las Drogas 2012 de la ONUDD revisó la cifra basándose en el análisis de la SEDRONAR y ajustó de forma retroactiva el dato para 2000 en el 0,9 por ciento. El Informe Mundial sobre las Drogas 2013 de la ONUDD observa que, según las últimas cifras, “el uso de cocaína se ha incrementado significativamente en Brasil, Costa Rica y, en menor medida, Perú, mientras que en Argentina no se notificó ningún cambio en su uso”. Según la ONUDD, el índice para Europa Occidental y Central, a donde se considera que suele destinarse la cocaína que transita por Argentina, se sitúa en un 1,2 por ciento.

Informe Mundial sobre las Drogas 2006. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Consultado en diciembre de 2013: http://www.unodc.org/pdf/WDR_2006/wdr06_spanish_vol1.www.pdf; Informe Mundial sobre las Drogas 2011. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Consultado en diciembre de 2013: http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/World_Drug_Report_2011_spanish.pdf; World Drug Report 2013. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Consultado en diciembre de 2013: http://www.unodc.org/unodc/secured/wdr/wdr2013/World_Drug_Report_2013.pdf.

9. Según la ONUDD, en lo que respecta al número de incautaciones de cocaína efectuadas en Europa, Argentina ocupa el tercer puesto en la región como país de origen. Sin embargo, las incautaciones son por lo general pequeñas y, teniendo en cuenta las cantidades totales, Argentina parece ser menos importante. No

obstante, la prensa local ha tendido a confundir la cantidad de cocaína que se está despachando con el número de incautaciones individuales y, por lo tanto, ha interpretado las cifras de una forma que situaría a Argentina como el tercer país de origen más importante. Este supuesto no está lo bastante claro como para afirmarse con certeza; de hecho, la propia ONUDD advierte de que las cifras se deberían tratar con cautela.

World Drug Report 2013. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

10. El Informe 2012 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) señalaba que, según los datos del propio Gobierno, “ha aumentado el número de laboratorios ilícitos de procesamiento de cocaína base descubiertos en la Argentina en los últimos años”, la mayoría de los cuales, añadía el Informe, estaban destinados a satisfacer la demanda interna. Esta última aseveración fue desmentida por el Gobierno argentino, que arguyó que no existían estadísticas al respecto y que, como respuesta, citaba su propio estudio sobre la cuestión, según el cual, si bien se había registrado un aumento en la cantidad de ‘centros de procesamiento’ ilícito entre 2007 y 2009, en el año 2011 se había verificado una importante disminución de estos. El Gobierno también insistió en diferenciar los centros de procesamiento o cocinas donde se completan las últimas etapas de fabricación del polvo de cocaína –y que, puntualizó, no eran especialmente profesionales y solían estar ubicados en viviendas y galpones precarios– de los laboratorios. Según ese mismo estudio, las cocinas se encontraban, en su mayoría, en la provincia de Buenos Aires. El Gobierno argentino también se mostró en desacuerdo con que la JIFE asegurara que en 2011 se habían incautado ‘importantes cantidades’ de estimulantes de tipo anfetamínico, precisando que “la información disponible no permite sustentar esa afirmación respecto de las tendencias que vienen registrándose en los últimos años”.

Informe correspondiente a 2012 (5 de marzo de 2013) Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Consultado en diciembre de 2013: http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2012/AR_2012_S.pdf; Ruchansky, E. (8 de marzo de 2013) Una Junta que no junta datos. Página 12. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-215367-2013-03-08.html>; véase también: Centros de procesamiento ilícito de estupefacientes en Argentina (marzo de 2011) SEDRONAR. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.sedronar.gov.ar/images/novedades/biblioteca/centros%20de%20procesamiento%20il%C3%ADcito.pdf>

11. Para un ejemplo reciente de estas conexiones, véase: Parkinson, C. (1 de noviembre de 2013) Argentina desmantela pandilla narcotraficante internacional y arresta a un pastor. InsightCrime. Consultado en diciembre de 2013: <http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/argentina-desmantela-pandilla-narcotraficante-internacional-y-arresta-a-un-pastor>

12. Ramírez, N. C. (15 de junio de 2013) Rosario, la capital narco argentina. El Espectador. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-428003-rosario-capital-drug-argentina>

13. Socolsky, C. (17 de febrero de 2013) “El gobierno provincial debe intervenir, sin echar culpas”. Página 12. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/18-37700-2013-02-17.html>; Del Frade, C. (2000) Ciudad Blanca, Crónica Negra. Ediciones Letra Libre.
14. Para un estudio sobre este enfoque: Corda, A. (junio de 2012) “Sistemas desproporcionados: Desproporción y costos económicos, institucionales y humanas de la política sobre estupefacientes en Argentina”. Serie Documentos de trabajo, Intercambios Asociación Civil. Buenos Aires, Argentina.
15. Citado en Touzé, G. (julio de 2010) Argentina: ¿La reforma que viene? Transnational Institute. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/dlr6s.pdf>
16. The Argentine Success Story and its Implications (octubre de 2011) Center for Economic and Policy Research. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.cepr.net/documents/publications/argentina-success-2011-10.pdf>
17. Informe laboral de la Encuesta Permanente de Hogares (mayo de 2013) Gobierno de Santa Fe. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/168397/817774/file/EPH.pdf>
18. Informe social de la Encuesta Permanente de Hogares (junio de 2010) Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/94105/453543/file/iSocial+EPH+10-8.pdf>
19. Tessa, S. (25 de enero de 2013) Las chicas de la esquina. Página 12. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-7794-2013-01-25.html>;
20. “Desamurallar para que el Otro ingrese” (julio de 2012) Colectivo de Acompañantes Juveniles del IRAR. Consultado en diciembre de 2013: <http://colectivocijpp.files.wordpress.com/2012/07/presentacion3b3n-27-de-septiembre.pdf>
21. Rossi: “Lo que hay en Rosario es un brutal enfrentamiento entre organizaciones narcos” (29 de mayo de 2013) La Capital. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.lacapital.com.ar/policiales/Rossi-Lo-que-hay-en-Rosario-es-un-brutal-enfrentamiento-entre-organizaciones-drugs-20130529-0049.html>
22. Kollmann, R. (27 de enero de 2013) Con orden de no ver nada. Página 12. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-212719-2013-01-27.html>
23. Este dista de ser un enfoque nuevo en América Latina. Aquí, por ejemplo, están los comentarios de un vecino de una de las comunas en las afueras de la ciudad colombiana de Medellín después de que las autoridades de la zona destruyeran varios puntos de venta de drogas (conocidos como ‘ollas’): “Cerraron seis casas de drogas aquí en Barbacoas. Y qué espectáculo que fue, con todas las cámaras y el presidente hablando de una gran intervención e inversión, pero si nos fijamos en el problema ahora, solo se movió un par de calles”.
- Bargent, J. (4 de noviembre de 2013) Moviendo el problema de lugar: La ‘guerra’ de Colombia contra el microtráfico. InsightCrime. Consultado en diciembre de 2013: <http://es.insightcrime.org/analisis/moviendo-el-problema-de-lugar-la-guerra-de-colombia-contra-el-microtrafico>
24. Para un ejemplo reciente, en que el testigo del asesinato policial fue asesinado posteriormente: Fue testigo de un supuesto caso de gatillo fácil, lo contó y lo mataron (8 de noviembre de 2013) Rosario3.com. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.rosario3.com/noticias/policiales/noticias.aspx?idNot=138321>
25. Véase, por ejemplo: Socolsky, C. (17 de febrero de 2013) “El gobierno provincial debe intervenir, sin echar culpas”. Página 12.
26. Naymark, S. M. (13 de junio de 2013) Atenúan la acusación contra Tognoli pero deciden que siga detenido. La Capital. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.lacapital.com.ar/policiales/Atenuan-la-acusacion-contra-Tognoli-pero-deciden-que-siga-detenido-20130613-0030.html>
27. Kollmann, R. (27 de enero de 2013) Con orden de no ver nada. Página 12.
28. Un periodista recibió amenazas (3 de abril de 2012) Rosario3.com. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.rosario3.com/noticias/policiales/noticias.aspx?idNot=109537>
29. Del Frade, C. (19 de febrero de 2013) El Rosario de los narcos. El Guardián.
30. Calles Perdidas (junio de 2013) Universidad Nacional de Rosario.
31. Las muertes por el narcotráfico (junio de 2013) Universidad Nacional de Rosario. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.unr.edu.ar/noticia/6606/las-muertes-por-el-drogatrafico>
32. La violencia entre bandas ya estaba presente durante el mandato del Gobierno peronista, pero era menos pronunciada y atraía poca atención política. Los Monos, por ejemplo, libraron una batalla territorial con sus rivales en la zona a principios de la década de 2000, mientras la provincia estaba gobernada por peronistas, la ideología política con la que se identifica el actual Gobierno nacional.
33. Notarfrancesco, M. (14 de septiembre de 2013) Dos salidas para intentar aplacar el incendio. Página 12. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-229032-2013-09-14.html>
34. Rechaza el gobierno de Santa Fe que haya una guerra de narcos (16 de julio de 2013) La Nación. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.lanacion.com.ar/1601474-rechaza-el-gobierno-de-santa-fe-que-haya-una-guerra-de-drugs>
35. “La provincia se negó a producir información

pública sobre los homicidios” (16 de julio de 2013) La Capital. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.lacapital.com.ar/politica/La-provincia-se-nego-a-producir-informacion-publica-sobre-los-homicidios-20130716-0077.html>

36. Calles Perdidas (junio de 2013) Universidad Nacional de Rosario.

37. Binner (12 de septiembre de 2013) “No podemos culpar al chico que asesinó, tampoco hay derecho que esté suelto”. La Capital. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.lacapital.com.ar/politica/Binner-No-podemos-culpar-al-chico-que-asesino-pero-tampoco-hay-derecho-que-este-suelto-20130912-0072.html>

38. El gobierno provincial pide gendarmes para que patrullen barrios rosarinos (15 de noviembre de 2013) La Capital. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.lacapital.com.ar/politica/El-gobierno-provincial-pide-gendarmes-para-que-patrullen-barrios-rosarinos-20131115-0004.html>

39. Acrich, G. (11 de septiembre de 2013) La Policía Comunitaria operará en el corazón de Los Monos. Diario Cruz del Sur. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.diariocruzdelsur.com.ar/noticia/noticia/id/13883>

40. Binner (12 de septiembre de 2013) “No podemos culpar al chico que asesinó, tampoco hay derecho que esté suelto”. La Capital.

41. “El sistema penal tiene selectividad, van presos los más vulnerables” (9 de septiembre de 2013) La Capital. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.lacapital.com.ar/policiales/El-sistema-penal-tiene-selectividad-los-que-van-presos-son-los-mas-vulnerables-20130909-0042.html>. Para más información sobre las consecuencias de este enfoque en las cárceles argentinas, véase: Sistemas sobrecargados (diciembre de 2010) Oficina en Washington para América Latina (WOLA) / Transnational Institute (TNI). Consultado en diciembre de 2013: <http://www.druglawreform.info/es/publicaciones/sistemas-sobrecargados/item/920-sistemas-sobrecargados>

42. Entre los funcionarios de alto nivel predomina el consenso de que las políticas que se impusieron en la década de 1990 han fracasado y hay indicios, como ciertos debates en el Congreso, de que Argentina se dirige hacia la descriminalización de la tenencia personal. Cabe destacar que representantes de la SEDRONAR, el organismo gubernamental encargado de las políticas de drogas, han expresado su apoyo a esta iniciativa. Por otro lado, durante la conferencia nacional anual sobre políticas de drogas organizada en 2013 por la ONG Intercambios, un panel sobre ‘Drogas y Seguridad’ –en el que participaron, entre otros, el titular de la Procuraduría Adjunta en Narcocriminalidad y una investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)– coincidió de forma unánime en el fracaso de las políticas de ‘guerra contra las drogas’ patrocinadas por los Estados Unidos, en la necesidad de distinguir entre la cuestión penal y el fenómeno del uso de drogas, y en la importancia de acabar con la estigmatización penal de las personas usuarias. Miembros del Gobierno también han reconocido públicamente las consecuencias

de un enfoque que se centra especialmente en los eslabones más vulnerables de la cadena. La principal ley relacionada con el uso y el tráfico de drogas es la Ley sobre Estupefacientes de 1989, basada en una ley aprobada en la década de 1970, durante la dictadura. Un fallo de la Corte Suprema de 2009 declaró la ilegalidad de las penas de prisión por tenencia personal, pero la forma en que está redactado ha dejado una situación poco clara. En la práctica, la policía sigue arrestando a personas por posesión personal y parece que lo habitual es que la decisión dependa, en última instancia, de la decisión de cada juez. Actualmente, existe también un movimiento para que se elabore una nueva ley sobre estupefacientes. Partiendo de las propuestas de los funcionarios involucrados, parece darse una tendencia hacia la descriminalización de la tenencia personal y el trato menos severo de los actores menores. Otras propuestas apuntan a rebajar o incluso eliminar la criminalización por la simple tenencia, así como a hacer cumplir legalmente el derecho a tratamiento de las personas usuarias. Informe correspondiente a 2012 (5 de marzo de 2013) Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Panorama de Argentina. Reforma a las leyes de drogas en América Latina. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.druglawreform.info/es/informacion-por-pais/argentina>

43. Hauser, I. (16 de febrero de 2013) Para combatir la narcocriminalidad organizada. Página 12. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-213997-2013-02-16.html>

44. Se ha dado cierta controversia sobre la forma en que se han manejado las pesquisas, las redadas y el actual proceso judicial contra los Cantero. A pesar de estar vinculado con el tráfico de drogas, un delito federal, el caso permanece en el tribunal provincial porque se alega que en el asesinato de septiembre de 2012 estuvieron presuntamente implicadas organizaciones dedicadas al tráfico, y el asesinato es un delito de ámbito provincial. El abogado que representa a los Cantero solicitó que el proceso se anulara debido a esta discrepancia, aunque dicha petición ha sido hasta la fecha desestimada por el juez responsable del caso. El jefe del Servicio Público de Defensa Penal de Santa Fe, Gabriel Ganón, que ya antes se había mostrado crítico con el poder judicial con respecto al tráfico de drogas, ha abogado por que el caso se resuelva en un tribunal federal y ha acusado a los jueces al cargo de falta de competencia. Las declaraciones de Ganón llevaron a un grupo de jueces socialistas a pedir su destitución.

45. El secretario de Seguridad Comunitaria denunció amenazas contra su vida (29 de junio de 2013) La Capital. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.lacapital.com.ar/policiales/El-secretario-de-Seguridad-Comunitaria-denuncio-amenazas-contra-su-vida-20130629-0033.html>

46. Esta operación también estuvo rodeada de cierta polémica. El secretario de Seguridad Nacional, la persona encargada de la operación, manifestó públicamente que la redada se realizó sin ayuda de la provincia y que el principal objetivo hacía tiempo que circulaba en la ciudad de Rosario, pero, según sus palabras, “no había ninguna voluntad de avanzar en una investigación seria y responsable”. El gobernador de Santa Fe señaló que sus fuerzas, de hecho, sí habían participado en la investigación. Más tarde, otros

miembros de su administración criticaron al Gobierno nacional por actuar de forma independiente y por tomar la decisión de trasladar a 5.000 agentes de la Gendarmería de las provincias hacia Buenos Aires, un paso que, según los funcionarios locales, desplazaría a las bandas criminales de la capital y las empujaría hacia las provincias. El secretario de Seguridad Nacional respondió apuntando que “si el Estado hubiera estado ausente en la provincia la semana pasada, no habríamos desarticulado una importante banda de drogas que estaba operando en Rosario”. Como ya se ha señalado, después de que el gobierno provincial se hubiera apuntado un tanto por sus actuaciones contra Los Monos, es difícil descartar que se estén dando maniobras políticas.

El fiscal Murray dijo que la provincia puso “en severo riesgo la investigación” (6 de septiembre de 2013) La Capital. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.lacapital.com.ar/policiales/El-fiscal-Murray-dijo-que-la-provincia-puso-en-severo-riesgo-la-investigacion-20130906-0049.html>; Berni: “La provincia en esta investigación por narcotráfico no tuvo nada que ver” (6 de septiembre de 2013) La Capital. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.lacapital.com.ar/policiales/Berni-La-provincia-en-esta-investigacion-por-narcotrafico-no-tuvo-nada-que-ver-20130906-0052.html>; Bonfatti dijo que “la provincia también fue parte de la investigación de la cocina de cocaína de Funes” (6 de septiembre de 2013) La Capital. Consultado en diciembre de 2013: <http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/Bonfatti-dijo-que-la-provincia-tambien-fue-parte-de-la-investigacion-de-la-cocina-de-cocaina-de-Funes-20130906-0054.html>

Serie Mercados de Drogas y Violencia

La serie sobre los mercados de drogas y la violencia asociada examina la compleja interacción entre la dinámica de un mercado ilícito y las políticas que se implementan para reprimirlo. La serie se centrará en ejemplos locales en donde la violencia está vinculada (aunque no de manera exclusiva) al narcotráfico.

La serie examina críticamente las políticas y prácticas que se aplican y hace recomendaciones de políticas alternativas que prioricen la reducción de la violencia.



Transnational Institute

Desde 1996, el programa Drogas y Democracia del TNI viene analizando las tendencias de la economía ilegal de las drogas y de las políticas globales sobre drogas, sus causas y efectos en la economía, la paz y la democracia. El programa ha adquirido reputación mundial como uno de los principales institutos internacionales de investigación sobre política de drogas, y como observador crítico de las instituciones de control de drogas de la ONU, en particular la Comisión de Estupeficientes (CND), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupeficientes (JIFE).

El programa promueve políticas basadas en los principios de la reducción de daños, los derechos humanos de usuarios y productores, así como los usos culturales y tradicionales de sustancias. El proyecto busca la reforma de los actuales convenios obsoletos de la ONU en materia de drogas hoy superados por nuevos conocimientos científicos y por nuevas políticas pragmáticas que han demostrado tener éxito. Durante la última década, el programa se ha enfocado en la evolución de la política de drogas y sus consecuencias para los países del Sur.

El programa realiza investigaciones de campo, promueve el debate político, provee información a funcionarios y periodistas, coordina campañas internacionales y conferencias, produce artículos y documentos de análisis, y mantiene un servicio electrónico de información sobre el tema.

Transnational Institute (TNI)
De Wittenstraat 25
1052 AK Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31-20-6626608
Fax: +31-20-6757176
E-mail: drugs@tni.org
www.tni.org/drogas

